

Editorial

Crisis..., ¿qué crisis?

Pocas palabras han sido más usadas, en este incipiente tercer milenio, que la palabra crisis. A tiempo y a destiempo, de manera atinada o utilizándola abusivamente, como referente panexplicativo de carácter cuasimetafísico; o aludiendo a ella cual si se tratara de una complejísima incógnita de imposible resolución, el caso es que el término crisis nos inunda, nos desborda, nos rodea, nos cerca y acorrala por todos lados, como los antiguos vapores del opio para el pueblo, nos adormece y, a poco que nos descuidemos... ¡hasta nos gobierna! Los medios de comunicación se llenan de tonantes (¿o serán tunantes?) augures que, a base de invocaciones a la «crisis», consiguen colar entre la opinión pública la convicción resignada de que casi todas las conquistas sociales, que históricamente se habían logrado y creíamos ya irreversibles, se han tornado de pronto material fungible, ineficiencias sistémicas, antiguallas de dudoso valor, productos obsoletos e inservibles con la fecha de caducidad sobrepasada, y que es mejor arrojar a la basura cuanto antes.

Sin embargo, lo que para muchos cursa como una experiencia de dolor y sufrimiento, para otros pocos es ocasión de disfrute y regocijo: *I'm having a very good crisis*, declaraba el magnate Georges Soros al *Daily Mail*, a finales de abril de 2009. O como reflejaba en una de sus corrosivas viñetas El Roto, al lado de quien llora por haber perdido su casa, se sienta un artista del pelotazo que en un alarde de cinismo se lamenta diciendo: «Lo mío es mucho peor, ya que tengo un montón de pisos sin vender». Esta pretendida crisis no es tal, sino que se trata más bien de una estafa de dimensiones colosales. Lo que para muchos trabajadores sociales se presenta a diario con aspecto de catástrofe social y humanitaria, tiene sin embargo su origen en la lógica implacable de un sistema gestionado por miríadas de expertos en econometría y finanzas, que sientan plaza de sabios y profetas a posteriori, una vez que el desastre

ya ha sucedido, mientras desprecian olímpicamente la perspectiva social de nuestra disciplina, a la que tachan de aldeana, ingenua y poco científica. ¡Cosa de gentes bienintencionadas pero ignorantes! Hasta tal punto de locura hemos llegado que, en ocasiones, incluso se nos llegan a mezclar y confundir las ideas a nosotros mismos y miramos, por ejemplo, al jubilado que invirtió sus ahorros en «preferentes», como si fuera alguien avaricioso que sufre las dolorosas consecuencias de «la crisis», cuando se trata simple y llanamente de una persona que ha sido víctima de un delito. Eso sí, cometido por elegantes, sorprendentes y poderosos delincuentes de cuello blanco. Expertos.

Buena parte de esos lustrosos ejemplares que se proclaman especialistas en *management*, gestión del cambio y la innovación, el emprendimiento, la flexiseguridad y mil otras zarandajas con ínfulas de nobleza intelectual, nos dirán que deberíamos ser más positivos y no hablar de crisis, sino de oportunidad. Incluso invocarán en su favor el peregrino argumento de que ¡en chino mandarín! ambas palabras comparten el mismo ideograma y se pronuncian de igual forma, afirmación que además de ser absolutamente falsa no hace sino poner una nota exótica a sus artes de encantadores de serpientes para intentar llevarnos al autoconvencimiento de que nuestra visión de la jugada es claramente miope, y encima culpablemente etnocéntrica. ¡Lo que nos faltaba! Sin embargo, la verdad, la única verdad semántica reconocible para quienes hablamos castellano es que, como señala la Real Academia de la lengua española, en su primera acepción *crisis* no es sino el «cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente». La verdad más cierta, pues, es que nos encontramos ante el momento crítico, la encrucijada vital y determinante que atraviesa una sociedad enferma. Esto es lo primero que debemos ser capaces de ver, constatar y afir-

mar: que mejoremos o empeoremos, dependerá de la terapia que nos apliquen. El ayuno a un hambriento no parece lo más apropiado.

Los síntomas de esta enfermedad que padece nuestro modelo social se pueden rastrear con múltiples, variados y precisos instrumentos de medida. Si, por ejemplo, tomamos la temperatura a la desigualdad que sufrimos, nos encontramos con que, según nos dice Eurostat, la distancia que separaba, el veinte por ciento, el quintil de población más rico del quintil más pobre, era 5,5 veces en 2005, y en 2012, nueve años más tarde, ha pasado a ser 6,8 veces. La distancia entre ricos y pobres se ha hecho mucho más grande con la crisis, de hecho actualmente es la mayor de los 28 países de la Unión Europea. ¡Campeones de Europa en desigualdad! Mientras la pobreza de ingresos crecía desde el 20,4 por ciento de la población en 2008 hasta el 22,2 por ciento en 2014, el número de millonarios, esto es, las personas con un patrimonio superior al millón de euros, también aumentaba en España el 40 por ciento durante ese mismo período, según el Informe sobre la Riqueza Mundial publicado por Capgemini y RBC Wealth Management.

Claro que si atendemos a los remedios que los europeos han encontrado, al menos desde Keynes, para reducir los peligros de la desigualdad a través de una política social asentada sobre una fiscalidad progresiva, y medimos el impacto de las transferencias sociales, en todos sus conceptos, que reciben los hogares españoles, sobre la reducción del porcentaje de personas bajo el umbral de pobreza, nos encontramos con que en España, pasamos de tener el 31,1 por ciento de población pobre, antes de transferencias, al 22,2% después de ello, lo que supone algo menos de nueve puntos de reducción. Digamos que, tras la actuación de toda nuestra política social, eliminamos algo menos de la tercera parte de la pobreza monetaria existente en nuestro país, mientras que en Estados de bienestar desarrollados, como los de Dinamarca, la pobreza se reduce a bastante menos de la mitad, con un descenso de casi quince puntos, por lo que pasa de afectar al 27 por ciento de los daneses, a quedarse reducida al 12 por ciento de la población; algo parecido a lo que ocurre en Noruega (14 puntos de reducción), Suecia (13.4), etc.

No obstante, es este reducido, enclenque, subdesarrollado y tradicionalmente mal nutri-

do Estado de bienestar español, el objetivo a batir por algunos de los principales artífices y muñidores de la actual situación, que pretenden ahora, haciendo esta vez de «la crisis» su coartada, reducir, trocear, privatizar, y si les fuera posible, incluso demoler por completo. El último Informe DEC (derechos, economía, cobertura), de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, denunciaba que en los años más agudos de la crisis, entre 2011 y 2013, cuando el desempleo registrado llegó a superar los 5.000.000 de personas, el gasto en Servicios Sociales se redujo en más de 2.000.000.000, el 13 por ciento menos, lo que además de implicar una caída del gasto por habitante de 354 a 307 euros significó la pérdida de casi 20.000 empleos en el sector. O dicho de otra forma: cuanto más necesarios eran los trabajadores sociales, más sistemáticamente fueron reducidos, precarizados y despedidos. Además de la dramática evolución de la atención a la dependencia, tenemos que sectores enteros de la acción social han sido desmantelados. En algunas comunidades autónomas, nos encontramos con que las partidas presupuestarias destinadas a sostener proyectos exitosos, y con larga experiencia demostrada en el campo de las toxicomanías, la integración de inmigrantes, el acompañamiento a jóvenes, el alojamiento social y la vivienda, etc., han sido suprimidos o eliminados sustancialmente o eliminados en su totalidad.

Actualmente en España, las personas en situación de pobreza o exclusión social —la conocida como población AROPE, según Eurostat— son en estos momentos 13.600.000, el 29,2 por ciento de la población —¡un verdadero disparate!— cuando en 2007 representaban «solamente» el 23,3 por ciento, según denunciaba la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (*European Anti Poverty Network*, EAPN) en su último informe. Si los millonarios se han multiplicado con la crisis, mucho más lo han hecho los pobres y excluidos. Con el agravante de que, puestos a fabricar pobres, lo hacemos sobre todo entre los jóvenes (el 36,4 por ciento de ellos lo son) y los niños: el 35,4 por ciento de nuestros niños viven en la pobreza y/o la exclusión social. Somos el tercer país europeo con más pobreza infantil, tras Rumanía y Bulgaria; lucimos la medalla de bronce en esta lamentable y tristísima competición, de la que nunca se harán eco los diarios deportivos

que se rinden extasiados ante los oros conquistados por La Roja.

Pero quizás sea en el ámbito de la exclusión y la precariedad residencial, precisamente allí donde la locura financiera creó las oportunidades más rápidas de enriquecimiento fácil -Solchaga *dixit*- donde ahora se perciben las huellas más dramáticas del empobrecimiento colectivo. Aquella vivienda por la que muchos hipotecaron su vida laboral completa, al embarcarse en préstamos para amortizarlos durante treinta años, resulta que, por arte de magia, ha perdido más de un tercio de su valor real en los siete últimos años. Aunque, eso sí, el préstamo concedido en su día sigue cotizándose al precio de la monstruosa cantidad a la que fue tasada la vivienda hace diez años. Quienes un día pensaron en sí mismos como ricos, y nominalmente lo eran sin duda, se encuentran ahora con que están inmensa, objetiva y realmente endeudados, endeudados hasta niveles inalcanzables, incluso en el dudoso supuesto de que pudieran llegar a disfrutar de toda una vida de trabajo asalariado. El *boom* inmobiliario, que llevó a firmar 129.128 hipotecas sólo en el mes de septiembre de 2005, y que alcanzó su máxima cifra de negocio en enero de 2007 con 18.473.000.000 de euros, se ha hundido hasta unas ridículas 15.000 hipotecas, firmadas por un valor total de apenas 1.587.000.000 de euros en agosto de 2014.

Como el negocio estaba en construir para vender, y no para satisfacer necesidades humanas a un precio razonable, nos encontramos ahora con que esa misma lógica absurda e implacable, mantiene a unas 30.000 personas viviendo sin hogar/sin techo, mientras más de 3.000.000 viviendas permanecen vacías, según el último censo. Viviendas vacías que, en una proporción pequeña pero no desdeñable, pueden ser de titularidad pública. Viviendas públicas que, en algunos casos, han sido malvendidas a fondos buitre invocando criterios de eficiencia económica y de gestión racional. Mientras tanto, en 2008 se produjeron unos 27.000 desalojos y lanzamientos forzosos de la vivienda habitual, según las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, para dejar constancia del impacto de la crisis sobre el funcionamiento de la Justicia; desalojos y lanzamientos forzosos que crecieron imparablemente hasta alcanzar la cifra de 70.257 en el año 2012 y que en 2014

se mantenían en 69.233. En medio de esta *debacle* social y humana, los Servicios Sociales carecen todavía hoy en día de instrumentos, competencia y recursos para intervenir de forma significativa en materia de vivienda. Quienes decidieron hace años que el mundo del ladrillo pertenecía a los ricos, fueron los mismos que hurtaron la posibilidad de contar con un amplio parque de vivienda social gestionado, entre otros actores competentes, por trabajadores sociales. Y, continúan haciéndolo. En la Administración pública española, Vivienda y Servicios Sociales son mundos paralelos, apenas si se tocan. ¡Y así nos va!

Sin embargo, los brillantes economistas de variado pelaje, adalides del neoliberalismo que nos prometían un gozoso futuro de riqueza y opulencia, mientras con obstinado desdén menospreciaban las políticas sociales en su conjunto y, por ende, el rol de los trabajadores sociales como profesión y del Trabajo Social como disciplina, no nos han librado de alcanzar estas elevadísimas cotas de miseria y fracaso económico que ahora mismo disfrutamos, gracias a ellos y a su misteriosa «ciencia».

Un penúltimo episodio en esta guerra de tronos, tan desiguales, tan diferentes, tan opuestos, nos lo ha brindado la escaramuza que han mantenido, de un lado la «Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Trabajo Social y Directores y Directoras de Centros y Departamentos de Trabajo Social de la Universidad Española» un nombre muy largo para un poder muy escaso, y del otro D. Didac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona, cargo unipersonal ocupado actualmente por quien en su día fue nombrado catedrático de Economía, Vicerrector de Economía y Administración entre 1990 y 1994, y director del Director del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de aquella Universidad. Los primeros manifestaban en un escrito que le enviaron recientemente, su desacuerdo ante la decisión de extinguir el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Barcelona, siendo así que este Departamento había sido, entre otras cosas, el depositario histórico de la Primera Escuela de Trabajo Social de la universidad pública española que fue fundada en Barcelona, hace ahora sesenta y cuatro años, entendiéndose que esta desaparición, como Departamento autónomo e

independiente, supone un claro retroceso «que afecta al desarrollo académico y profesional de la disciplina, argumento esencial del Estado Social y los derechos sociales», por lo que terminaban apelando a la reflexión y a que se modificara la decisión adoptada.

A todo ello respondía olímpicamente el Excmo. y Magfco. Sr. Rector, diciendo que la decisión es consecuencia «d'una llarga crisi socioeconòmica que ha limitat i reduït els recursos públics disponibles»; pero que sin duda, se trata de «una reforma que, a més, permetrà una major eficàcia i aplicar economies d'escala»; y termina asegurando, no se sabe muy bien en base a qué razones, que la reforma redundará en «un millor ús dels recursos públics i en un major impacte de la Universitat de Barcelona en l'Estat del benestar» (¿...?), escrito esto último así, ¡oh, terrible lapsus!, con minúscula; un bienestar con minúscula. En todo caso, puestos a extinguir departamentos en el ara de l'Estat del benestar, ¿no habría sido acaso mejor disolver algún Departamento de su honorable Facultad de Ciencias Económicas que muy probablemente tendrá bastante más responsabilidad directa y personalizable en el penoso estado de las arcas públicas?

Si a este lamentable episodio le unimos la reciente desaparición de una revista académica, como *Portularia*, detrás de lo cual se encuentran las dificultades enormes que hay que salvar en este país para sacar adelante, con recursos muy escasos y a base de un enorme esfuerzo personal, una publicación excelente que, en un breve período de tiempo, había conseguido asentarse como referencia de prestigio y obligada consulta en nuestra disciplina, entenderemos la preca-

ria situación que vive el Trabajo Social dentro de una Universidad tan escuálida como la española, marcada por el aislamiento frente a los problemas y retos de la sociedad, y por siglos de nepotismo y estamentalización de los saberes, a todo lo cual debe, ahora, añadirse la competencia descarnada y feroz por unos recursos ciertamente escasos, pero que además se encuentran muy cicateramente distribuidos entre unos y otros, como resultado de las luchas entre grupos muy desiguales en poder e influencia.

Es evidente que, al lado de la masiva expansión de la pobreza, el desempleo y la exclusión que afectan a millones de personas en nuestro país, los problemas vividos por los trabajadores sociales pueden ser considerados una minucia, un tema menor y relativamente despreciable, sobre todo si se entienden como la defensa egoísta de unos intereses meramente corporativos, pero no lo son, si comprendemos y explicamos las consecuencias que derivan de ellos para todos los ciudadanos, no sólo para una respetable, aunque reducida, corporación profesional; sobre todo cuando vemos cómo se consolida entre quienes nos gobiernan una visión estrechamente economicista de la gestión administrativa, que concede un papel secundario, subalterno y descaradamente electoralista a los Servicios Sociales y a la Política Social. En momentos como los que atravesamos, conviene tenerlo presente y creemos que es nuestra obligación moral e intelectual, recordarlo a todo aquel que leyere estas líneas.

Pedro CABRERA CABRERA
y Luis NOGUÉS SÁEZ
Directores